



SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso: ORDINARIO LABORAL
Radicado: 05001-31-05-005-2007-00049-02 (O2-23-183)
Demandante: ABELARDO ANTONIO POSADA BERMÚDEZ, CARLOS EDUARDO OTÁLVARO ARBOLEDA, WBEIMAR ANDRÉS CEBALLOS JIMÉNEZ, RUBÉN DARÍO COSSIO TABORDA y EVERY SANEY RENGIFO ORTIZ
Demandadas: DEPARTAMENTO ANTIOQUIA y FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA
Procedencia: JUZGADO QUINTO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
Asunto: LIQUIDACIÓN DE COSTAS

En Medellín, a los veinticinco (25) días del mes de septiembre del año dos mil veintitrés (2023), la **Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín**, integrada por los magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE y VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO, quien actúa como magistrado sustanciador, procede a dictar decisión de segundo grado, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL promovido por ABELARDO ANTONIO POSADA BERMÚDEZ, CARLOS EDUARDO OTÁLVARO ARBOLEDA, WBEIMAR ANDRÉS CEBALLOS JIMÉNEZ, RUBÉN DARÍO COSSIO TABORDA y EVERY SANEY RENGIFO ORTIZ en contra del DEPARTAMENTO ANTIOQUIA y FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA, conocido bajo el radicado único nacional 05001-31-05-005-2007-00049-02 (O2-23-183), a fin de resolver el recurso de apelación impetrado por la parte actora, en contra de la decisión adoptada el 29 de noviembre de 2019 y modificada por auto del 24 de mayo de 2023, y mediante la cual el juzgador de instancia aprobó la liquidación de costas y agencias en derecho.

1. ANTECEDENTES

Los señores ABELARDO ANTONIO POSADA BERMÚDEZ, CARLOS EDUARDO OTÁLVARO ARBOLEDA, WBEIMAR ANDRÉS CEBALLOS JIMÉNEZ, RUBÉN DARÍO COSSIO TABORDA y EVERY SANEY RENGIFO ORTIZ, actuando por intermedio de gestor judicial, promovieron demanda ordinaria laboral en contra del DEPARTAMENTO ANTIOQUIA y la FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA, en punto a obtener, al amparo del fuero circunstancial, el reintegro al cargo que venían

desempeñando al momento de la extinción de vínculo acaecido el 25 de agosto de 2006, deprecando en consecuencia, el reconocimiento de todos los salarios, prestaciones legales y extralegales, incluyendo los aumentos e incrementos dejados de percibir desde el día de la desvinculación hasta la fecha en que se verifique su reincorporación, junto con la indemnización de perjuicios morales, la indexación y las costas.

La controversia se dirimió en primera instancia por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín, el 06 de marzo de 2009 (págs.771 a 809, doc.01, carp.01), el que absolvió al extremo demandado de todas y cada una de las pretensiones incoadas en su contra por los suplicantes, a la vez que se abstuvo de imponer en condena en costas; sentencia que fue confirmada por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior de Medellín, el 08 de octubre de 2010 (págs.907 a 925, doc.01, carp.02), sin lugar a condena en costas en esta instancia. Ulteriormente, en sede del recurso extraordinario de casación, la Corte Suprema de Justicia en proveído del 29 de mayo de 2019 (págs.1175 a 1318, doc.01, carp.01), casó la sentencia proferida por el juez de apelaciones y de consiguiente, revocó la decisión adoptada en primera instancia para en su lugar, acceder al reintegro reclamado por los ex trabajadores, *“... junto con el pago de los salarios y prestaciones sociales legales y extralegales dejadas de percibir desde la fecha de la desvinculación y hasta cuando se materialice el reintegro, con los respectivos incrementos legales y extralegales, sin solución de continuidad; sumas que deberán ser indexadas hasta el momento de su pago efectivo ...”*; mientras que condenó a la parte demandada, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, al pago de las expensas y agencias en derecho que se causaron en las instancias.

1.1. Trámite de Primera Instancia

El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín, en fecha 29 de noviembre de 2019 (págs.1215 a 1216, doc.01, carp.01) emitió auto de cúmplase lo dispuesto por el superior funcional, y dispuso que por la secretaría del despacho se liquidaran las costas del proceso, las cuales se liquidaron por valor de \$ 57.968.720 por concepto de agencias en derecho a cargo de la entidad territorial convidada a juicio y a favor de los accionantes, sobre la que se impartió aprobación en la misma fecha, discriminadas de la siguiente manera:

DEMANDANTE	AGENCIAS EN DERECHO PRIMERA INSTANCIA	PÁG(s), DOC.01, CARP.01	AGENCIAS EN DERECHO SEGUNDA INSTANCIA	PÁG, DOC.01, CARP.01
Abelardo Antonio Posada Bermúdez	\$ 8.281.160	1215 a 1216	\$ 3.312.464	1213
Carlos Eduardo Otálvaro Arboleda	\$ 8.281.160	1215 a 1216	\$ 3.312.464	1213
Wbeimar Andrés Ceballos Jiménez	\$ 8.281.160	1215 a 1216	\$ 3.312.464	1213
Rubén Darío Cossio Taborda	\$ 8.281.160	1215 a 1216	\$ 3.312.464	1213
Every Saney Rengifo Ortiz	\$ 8.281.160	1215 a 1216	\$ 3.312.464	1213

1.2. Recurso de Apelación

Inconforme de la decisión antes descrita, el apoderado judicial de la parte demandante (págs.1259 a 1267, doc.01, carp.01), interpuso los recursos de reposición, y en subsidio apelación, solicitando se imponga el máximo valor contemplado como tope en el Acuerdo 1887 de 2003 para la costas de primera y segunda instancia, como quiera que a su juicio *“...no tiene en cuenta que este ha sido un largo trámite procesal pues ha durado desde el 8 de febrero de 2007 hasta la fecha 4 de diciembre de 2019, es decir, van más de doce (12) años de vigilancia y actuación continua sobre un proceso al que la parte demandante se vio avocada porque la parte demandada lo desvinculó ilegalmente”*; agregando que se atendió de manera diligente el proceso y compareció a todas las diligencias convocadas por los juzgadores.

En tal contexto, el juzgador de primer nivel en providencia del 24 de mayo hogaño (doc.02, carp.01), repuso el auto confutado y en consecuencia, fijó las agencias en derecho de primera instancia en la suma de \$ 186.036.703,25, *“...correspondientes al 15% del valor de las pretensiones reconocidas, más 4 SMLMV para el año 2019”*; a la par que, concedió el recurso de apelación *“...teniendo en cuenta que no se asignó el porcentaje máximo permito(sic), como lo solicitó el togado de la parte, y existiendo recurso frente a las agencias en derecho fijadas por el superior”*.

1.3. Trámite de Segunda Instancia

El recurso de apelación fue admitido por ésta corporación el 04 de agosto de 2023 (doc.02, carp.02), y se corrió traslado a las partes en el mismo proveído para que, de conformidad con lo previsto en el numeral 1º del artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, presentaran alegatos de conclusión por escrito, de estimarlo del caso; oportunidad en la cual la poderhabiente judicial del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, solicitó se desestime el recurso interpuesto, acudiendo a idénticos argumentos a los planteados cuando se opuso al recurso de reposición en el trámite de primer grado (doc.03, carp.02). Los demandantes guardaron silencio.

2. ANÁLISIS DE LA SALA

Surtido el trámite en esta instancia, sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el extremo litigioso por activa, advirtiéndose que de conformidad con el principio de consonancia consagrado en el artículo 66A del CPTSS, el estudio del auto impugnado se limitará a los puntos de inconformidad materia de alzada.

2.1. Problema Jurídico

El punto neural de debate en la presente Litis se contrae a determinar si la liquidación de las agencias en derecho causadas en el trámite de la primera y segunda instancia del proceso ORDINARIO LABORAL promovido por ABELARDO ANTONIO POSADA BERMÚDEZ, CARLOS EDUARDO OTÁLVARO ARBOLEDA, WBEIMAR ANDRÉS CEBALLOS JIMÉNEZ, RUBÉN DARÍO COSSIO TABORDA y EVERY SANEY RENGIFO ORTIZ en contra del DEPARTAMENTO ANTIOQUIA y la FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA, se ajusta a la normativa que regula la materia.

2.2. Tesis de la Sala

El sentido del fallo de esta Corporación será modificadorio, en cuanto que el monto que por agencias en derecho se fijaron en la segunda instancia, no responden a los criterios establecidos en el artículo 3 del Acuerdo 1887 de 2003, y confirmatoria en lo demás, de conformidad con los planteamientos que pasan a exponerse:

2.3. Solución del Problema Jurídico Planteado

Siguiendo los lineamientos de la jurisprudencia nacional esta Corporación relleva que las costas, esto es, la erogación económica que corresponde efectuar a la parte que resulte vencida en un proceso judicial, está conformada por dos rubros distintos: las expensas y las agencias en derecho. Las primeras corresponden a los gastos surgidos con ocasión del proceso y necesarios para su desarrollo, descritos genéricamente en el numeral 3° del artículo 366 CGP como todos los demás gastos hechos por la parte beneficiada con la condena. Por otra parte, las agencias en derecho tienen por finalidad la compensación por los gastos de apoderamiento en que incurrió la parte vencedora, aunque pueden fijarse sin que necesariamente hubiere mediado la intervención directa de un profesional del derecho (CC sentencia C-089 de 2002).

De conformidad con lo indicado en el artículo 365 del CGP, las costas procesales, comprensiva de las expensas y las agencias en derecho, se imponen a cargo de la parte vencida, a la que se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto, y a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza.

Las costas son objeto de liquidación por el tribunal o juzgado de la respectiva instancia o recurso, aplicando las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura para la fijación de las agencias en derecho y teniendo en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión profesional desplegada, así como la cuantía de las condenas, sin exceder el tope máximo de dichas tarifas, como se previno en el artículo 366 CGP.

Para los anteriores efectos el Consejo Superior de la Judicatura dispuso la emisión del **Acuerdo 1887 de 2003**, modificado por el **Acuerdo 2222 de ese mismo año**, aplicable al caso objeto de análisis, y en relación con el asunto que nos ocupa fijó las siguientes tarifas de agencias en derecho para el área laboral:

2.1. PROCESO ORDINARIO

2.1.1. A favor del trabajador:

***Única instancia.** Hasta el veinte por ciento (20%) del valor de las pretensiones reconocidas en la sentencia. Si ésta, además, reconoce obligaciones de hacer, se incrementará hasta dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes por este concepto. En los casos en que únicamente se ordene o niegue el cumplimiento de obligaciones de hacer, hasta dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes.*

Primera instancia. Hasta el veinticinco por ciento (25%) del valor de las pretensiones reconocidas en la sentencia. Si ésta, además, reconoce obligaciones de hacer, se incrementará hasta cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes por este concepto. En los casos en que únicamente se ordene o niegue el cumplimiento de obligaciones de hacer, hasta cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Segunda instancia. Hasta el cinco por cinco (5%) del valor de las pretensiones confirmadas o revocadas total o parcialmente en la sentencia. Si ésta, además, reconoce obligaciones de hacer, se incrementará hasta dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes por este concepto. En los casos en que únicamente se ordene o niegue el cumplimiento de obligaciones de hacer, hasta dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

***PARÁGRAFO.** Si la sentencia reconoce prestaciones periódicas, hasta veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes. -Negritas y subrayado intencional de la Sala-*

Adicionalmente, conviene resaltar que de conformidad con lo indicado en el numeral 1º del artículo 365 del CGP, la condena en costas no procede por un obrar temerario, de mala fe, o doloso de la parte condenada, sino que es el resultado de ser vencida en el proceso, es decir, su imposición se hace de forma objetiva atendiendo la prosperidad de las pretensiones y/o las excepciones; en tanto que su liquidación, por el contrario, corresponde a criterios ponderativos relacionados con la naturaleza, calidad, duración de la gestión ejecutada por el mandatario judicial, la cuantía de las pretensiones, y demás circunstancias relevantes, dentro de un concepto claro de razonabilidad y proporcionalidad.

Es meritorio entonces apuntar que las normas señaladas establecen criterios de carácter cualitativo y cuantitativo para que el juzgador fije tales agencias, sin que se pueda imponer de manera automática el valor de dicha importe, pues simplemente orientan al juez para que éste, haciendo un ejercicio discrecional ponderativo, fije un monto que considere equitativo, razonable, prudente y proporcional con el valor de la condena o la absolución impartida, justipreciando la duración y calidad de la gestión profesional realizada en el transcurso del proceso, teniendo en cuenta los límites máximo y mínimo fijados por la ley, pero sin que ello signifique que el fallador esté impelido a fijar como agencias el máximo referenciado.

En síntesis y de acuerdo con lo delineado por la Corte Suprema de Justicia en decisión STC3869 de 2020, la fijación de las agencias en derecho debe seguir los lineamientos o parámetros que a continuación se enuncian: “... (i) *deben motivarse y determinarse en la respectiva actuación que las genere;* (ii) *una vez en firme, el secretario del despacho de única o primera instancia, las incluirá en la liquidación de las costas; y de ese trabajo,* (iii) *el juez o magistrado hará un control de legalidad mediante auto susceptible de reposición y de apelación según corresponda, con el fin de verificar si las aprueba, modifica o dispone su reliquidación*”.

Revisado el expediente, es del caso subrayar que conforme a lo resuelto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia al momento de desatar el recurso extraordinario de casación, se dispuso el reintegro de los demandantes al cargo que venían ocupando al momento de su desvinculación, con el consecuente reconocimiento y pago de las acreencias sociales legales y extralegales que se causaron desde la ruptura del vínculo y hasta que se corrobore su reincorporación. Conforme lo dicho, la demandada, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, expidió resolución a través de la cual da cumplimiento la decisión judicial, cuantificando y liquidando las acreencias laborales a las que tiene derecho cada uno de los demandantes, como a continuación se detalla:

DEMANDANTE	VALOR CONDENA
Abelardo Antonio Posada Bermúdez	\$ 135.458.893,00
Carlos Eduardo Otálvaro Arboleda	\$ 407.478.528,00
Wbeimar Andrés Ceballos Jiménez	\$ 334.464.264,00
Rubén Darío Cossio Taborda	\$ 340.760.856,00
Every Saney Rengifo Ortiz	\$ 0,00

Aclarando la Corporación que, para el caso de la deprecante EVERY SANEY RENGIFO ORTIZ se estableció que *“...[c]ambió su condición a trabajador oficial a partir del 24/10/2019 como consecuencia del fallo. Se liquidó como trabajadora oficial y se liquidó lo pagado en este mismo periodo como empleado público. Resultado de este cálculo se encontró que el valor pagado supera el valor a pagar como trabajador oficial, generándose un valor negativo, razón por la cual no procede pago alguno”* (págs.1578 a 1586, doc.01, carp.01).

Conforme lo precedente, el juez unipersonal fijó el valor de las agencias en derecho en un valor igual al 15% del valor de las condenas resultantes, agregando una cantidad igual al SMLMV para el año 2019 por cuenta de la obligación de efectuar el reintegro a la que fue condenada la entidad territorial; dando cumplimiento a lo señalado en el artículo 2.1.1. del Acuerdo 1887 de 2003, a más de que, conforme con los criterios establecidos en dicha normativa, *“...[l]as tarifas por porcentaje se aplicarán inversamente al valor de las pretensiones”*.

Las anteriores disposiciones normativas explican la relación inversamente proporcional que caracterizan la especificación de los puntos porcentuales por aplicar de cara al valor de las condenas que finalmente se abrieron paso. Ello así, no deviene en equivocada la decisión del *a quo*, en tanto cumpliendo las directrices explicadas en el punto anterior, fijó las agencias en derecho en un 15% de las sumas dinerarias que fueron reconocidas a cada uno de los trabajadores más un SMLMV para el 2019 por la obligación o prestación de hacer, guarismo que corresponde a un ejercicio ponderativo equitativo, razonable, prudente y proporcional, a juzgar por la naturaleza, calidad y la duración útil de la gestión desplegada, a sabiendas de que el límite máximo autorizado es el 25%, y tanto más importante, si se trata de una acción judicial que tuvo su génesis en el año 2007.

En tal dirección, fijar las agencias en derecho al tope máximo según la tesis propuesta por el impugnante, sería tanto como desconocer de manera frontal los diáfanos mandatos que dimanen del tenor del artículo 3 del Acuerdo 1887 de 2003, los que valga decir, establecen que *“[e]l funcionario judicial, para aplicar gradualmente las tarifas establecidas hasta los máximos previstos en este Acuerdo, tendrá en cuenta la naturaleza, calidad y duración útil de*

la gestión ejecutada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, autorizada por la ley, la cuantía de la pretensión y las demás circunstancias relevantes, de modo que sean equitativas y razonables. Las tarifas por porcentaje se aplicarán inversamente al valor de las pretensiones”.

Establecido este punto y acudiendo al mismo ejercicio ponderativo para el valor de las agencias en derecho fijadas en segunda instancia, la Sala modificará su valor pasando de la suma de \$ 3.312.464, al 1% del valor de las condenas que salieron avantes y lo correspondiente a medio 1/2 SMLMV para el año 2019 por la obligación de hacer, vale decir, la suma de \$ 414.058. Por manera que, conforme la liquidación que se glosa a esta providencia, el señor ABELARDO ANTONIO POSADA BERMÚDEZ tiene derecho a la suma de \$ 1.768.647 por concepto de agencias en derecho en la segunda instancia; para el caso del señor CARLOS EDUARDO OTÁLVARO ARBOLEDA la suma de \$ 4.488.843; y del señor WBEIMAR ANDRÉS CEBALLOS JIMÉNEZ el valor de \$ 3.758.701 y, los señores RUBÉN DARÍO COSSIO TABORDA y EVERY SANEY RENGIFO ORTIZ las sumas de \$ 3.821.667 y \$ 414.058, respectivamente.

Como colofón de lo expuesto, y atendiendo a las consideraciones fáctica y jurídicas explicitadas con suficiencia, se dispondrá por la Sala la modificación de la decisión adoptada el 29 de noviembre de 2019 y modificada por auto del 24 de mayo de 2023, únicamente en cuanto al valor de las costas causadas en segunda instancia en lo precisos términos descritos en la parte motiva de este proveído.

3. COSTAS

De conformidad con lo dispuesto en el **artículo 365 del CGP**, no se impondrán costas procesales en esta instancia, por no haberse causado, en la medida de su no comprobación.

En mérito de lo expuesto el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN**, Sala Quinta de Decisión Laboral,

4. RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR el auto objeto de apelación proferido por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín el 29 de noviembre de 2019, y en su lugar, fijar la suma de \$ 14.251.915 como valor de las agencias en derecho causadas en la segunda instancia, a favor de los promotores del juicio y a cargo del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, discriminadas como se detalla a continuación:

- a. \$ 1.768.647 a favor del señor ABELARDO ANTONIO POSADA BERMÚDEZ.
- b. \$ 4.488.843 a favor del señor CARLOS EDUARDO OTÁLVARO ARBOLEDA.
- c. \$ 3.758.701 a favor del señor WBEIMAR ANDRÉS CEBALLOS JIMÉNEZ.
- d. \$ 3.821.667 a favor del señor RUBÉN DARÍO COSSIO TABORDA.
- e. \$ 414.058 a favor de la señora EVERY SANEY RENGIFO ORTIZ.

SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás el auto que se revisa por vía de apelación, por las razones que da cuenta la parte motiva de este proveído.

TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia.

Lo resuelto se notifica **POR ESTADOS**, en los términos previstos en el artículo 41 literal c) del estatuto instrumental laboral.

Déjese copia digital de lo decidido en la Secretaría de la Sala, previa anotación en el registro respectivo, y **DEVUÉLVASE** el expediente al juzgado de origen.


NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO
Magistrado Ponente



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES
Magistrado



SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE
Magistrada

CONSTANCIA SECRETARIAL

Se deja constancia de que las anteriores firmas corresponden a las firmas originales de los magistrados que integran la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín.



RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario



LIQUIDACIÓN COSTAS CAUSADAS EN SEGUNDA INSTANCIA

DEMANDANTE	VALOR CONDENA	PORCENTAJE A APLICAR + 1/2 SMLMV 2019	AGENCIAS EN DERECHO SEGUNDA INSTANCA
Abelardo Antonio Posada Bermúdez	\$ 135.458.893,00	(1% + \$414.058)	\$ 1.768.647
Carlos Eduardo Otálvaro Arboleda	\$ 407.478.528,00	(1% + \$414.058)	\$ 4.488.843
Wbeimar Andrés Ceballos Jiménez	\$ 334.464.264,00	(1% + \$414.058)	\$ 3.758.701
Rubén Darío Cossio Taborda	\$ 340.760.856,00	(1% + \$414.058)	\$ 3.821.667
Every Saney Rengifo Ortiz	\$ 0,00	\$ 414.058,00	\$ 414.058
TOTAL			\$ 14.251.915

LA SECRETARIA DE LA SALA LABORAL DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE MEDELLÍN CERTIFICA:

Que esta providencia fue notificada en los **ESTADOS n.º 162** fijados en la secretaría del Tribunal, hoy 26 de septiembre de **2023** a las 08:00am, los cuales pueden ser consultados en "Publicación de Estados Electrónicos SL-TSM"

RUBEN DARIO LOPEZ BURGOS
Secretario